

EL NUEVO MAPA POLÍTICO: Elecciones 2007 y los componentes y escenarios de la crisis política del 2008.

THE NEW POLITICAL MAP: 2007 Elections

Pedro Santana Rodríguez¹

Abstract

This paper presents the new Colombian political map as a result of the congressional elections. The analysis is based on the electoral guarantees offered by the government as well as the efforts made by civil society to participate in the monitoring of the electoral process.

The role of the Electoral Observation Mission (EOM), and the public defender are described. This mechanisms are undertaken in the search of assuring transparent elections, which provide full guarantees to citizens to participate in presidential elections. Finally, the municipal political map, examining the distribution of the mayor's offices, municipal councils and the matrix of the political parties and movements with their respective participation is shown.

Resumen.

El tema central del cual se ocupa este artículo es el nuevo mapa político en Colombia como consecuencia de las elecciones a Congreso de la República. Parte su análisis de las garantías electorales ofrecidas por el gobierno y de los esfuerzos que hace la sociedad civil por participar en la vigilancia del proceso electoral.

1 Filósofo. Analista político. Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía y Director Revista Foro.



Se detiene en el papel de la Misión de Observación Electoral, MOE, y la Defensoría del Pueblo en la búsqueda de garantizar unas elecciones transparentes y que brinden plenas garantías a los ciudadanos en el debate electoral; finalmente, reseña el mapa político municipal, revisando la configuración de las alcaldías y los concejos municipales y la matriz de partidos y movimientos como quedaron representados.

Finalmente, el autor revisa en detalle la actual coyuntura política asociada a la crisis de los partidos y movimientos, los efectos de la parapolítica y los impactos e iniciativas de la reforma política, en resumen, los componentes y los escenarios de la crisis política.

Garantías electorales y participación política.

Las garantías electorales fueron limitadas puesto que en Colombia se requiere con urgencia una reforma política y una reforma electoral. En muchas regiones del país los esfuerzos de la sociedad civil por realizar una masiva observación electoral chocaron con las amenazas y el miedo de los ciudadanos para participar en este mecanismo democrático.

Quizás antes de presentar las cifras para examinar como les fue a los distintos partidos políticos sea necesario señalar que además de los problemas de indiferenciación ideológica y programática, de trasteo de votantes, del financiamiento ilegal, de indisciplina interna y oportunismo político tengamos que mencionar el problema de la violencia y el conflicto armado que también pesaron, desafortunadamente, en la pasada campaña electoral.

La violencia política sigue siendo además la constante en las últimas elecciones municipales y departamentales. En el curso de la campaña electoral reciente fueron asesinados 29 candidatos y precandidatos, de los distintos partidos que concurrieron al certamen electoral. Individualmente considerados, el principal afectado lo fue el Partido Liberal, con seis de los 29 homicidios, partido que se encuentra en la oposición al gobierno del presidente Uribe. Los más afectados con las amenazas fueron los candidatos del Polo Democrático Alternativo, recibieron 19 amenazas del total de 91 amenazas que se registraron en la Misión de Observación Electoral, MOE. Los más afectados con los atentados fueron los candidatos del Partido Conservador, cinco de sus



candidatos fueron objeto de atentados de un total de 23 atentados, así mismo la MOE ha registrado en éstas elecciones 8 secuestros. Estas cifras son mayores a las que se registraron por parte de la Policía Nacional para el año 2003. En aquellas elecciones fueron asesinados 25 candidatos, fueron secuestrados nueve y hubo siete atentados. Si se mira desde la perspectiva de la coalición de gobierno todos los partidos de dicha coalición ponen la mayor cantidad de candidatos asesinados, en estas elecciones, principalmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Esta práctica –que merece el repudio de todos los demócratas- nos lleva a afirmar una vez más que estas guerrillas cometen crímenes de lesa humanidad y que su objetivo en la campaña electoral es su boicot o sabotaje. Por ello el gobierno se equivoca cuando en vez de tomar medidas para contener su criminal accionar piensa que las FARC lo que buscan es infiltrar a los gobiernos municipales o departamentales.

Las garantías electorales fueron limitadas como ya indicamos puesto que en Colombia se requiere con urgencia una reforma política y una reforma electoral sobre lo cual volveremos al final. En muchas regiones del país los esfuerzos de la sociedad civil por realizar una masiva observación electoral chocaron con las amenazas y el miedo de los ciudadanos para participar en este mecanismo democrático. Pese a los esfuerzos, por ejemplo, fue imposible organizar la Misión en departamentos como Córdoba y en muchos otros apenas se pudo organizar en algunos municipios, tales los casos del Meta o la Guajira, pero también en zonas con amplia influencia de las FARC como el caso del Caquetá, Cauca, Putumayo o Nariño.

Pero también hay que resaltar aspectos positivos en la reciente jornada electoral el primero de ellos el aumento en la participación ciudadana en donde se paso de 11.5 millones en las elecciones de 2003 a un 15.5 millones en las elecciones de 2006, la abstención retrocedió un 8% lo cual es insuficiente, pero altamente significativo en la actual coyuntura del país. Los nuevos electores representaron un 30% y muchos de ellos en distintas regiones del país parecen ser los responsables de las derrotas de los parapolíticos. Se requieren aún mayores esfuerzos en materia de formación y educación ciudadana pues no es aún optimo que más del 45% del total de la población se abstenga de participar para decidir sobre los destinos de municipios y departamentos en donde se



juega el futuro de la educación, la salud, el saneamiento básico y el agua potable como las funciones más importantes que tienen en sus manos alcaldes y gobernadores, asambleas y concejos municipales.

Un segundo asunto positivo para destacar se relaciona con los esfuerzos que realizó la Registraduría Nacional del Estado Civil para tratar de blindar las elecciones con las herramientas insuficientes de que dispone. Las denuncias ante el Consejo Nacional Electoral que elevó la Registraduría para que se invalidaran las inscripciones fraudulentas que llevó a este organismo a anular cerca de 365 mil inscripciones de cerca de 950 mil denunciadas, constituyen hechos positivos. También lo fueron el cambio de los registradores en muchas regiones del país o su traslado, los cambios para la conformación de los jurados de votación y su traslado a última hora en regiones claves como el departamento del Atlántico fueron medidas acertadas. También lo fueron el entendimiento y la colaboración que se presentó entre las Misiones de Observación Electoral y las autoridades electorales representadas en la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Mención especial debe hacerse públicamente al papel del Registrador Juan Carlos Galindo quien mostró diligencia e inteligencia para afrontar un proceso en extremo riesgoso y en el cual no contó desafortunadamente con mayores instrumentos legales que le permitieran ir más a fondo en el blindaje del proceso electoral.

Otro aspecto altamente positivo lo constituyó la organización de la ciudadanía alrededor de distintos instrumentos de la sociedad civil que logró movilizar a un importante número de ciudadanos para la defensa del proceso electoral y para lograr unas elecciones libres, responsables y transparentes. Experiencias como la de la Misión de Observación Electoral, MOE, Vote Bien, Congreso Visible, Voto Vital, etc., mostraron que los ciudadanos y ciudadanas, si se les convoca de manera adecuada, pueden constituirse en un fuerte factor de disuasión para quienes atentan contra el libre desarrollo de las elecciones y para proteger la libre decisión de los ciudadanos. Este elemento resultará estratégico si ahora se realiza un proceso de seguimiento a las administraciones que representan un riesgo para la democracia en el país.

Finalmente cabe destacar la labor de algunos medios de comunicación que dieron amplio despliegue a los mapas de riesgo electoral que



presentaron diversos organismos pero principalmente la Misión de Observación Electoral, MOE, y la Defensoría del Pueblo. También en el resultado final tiene mucho que ver el cubrimiento que algunos medios radiales y escritos han dado al escándalo de la parapolítica.

Comenzando por las 32 gobernaciones el panorama político queda de la siguiente manera: El Partido de la U eligió siete (7) gobernadores siendo individualmente quien mayor número de gobernaciones obtuvo (Casanare, Chocó, Guainía, Magdalena, Meta, Sucre y Vichada). Le sigue en número de gobernadores elegidos el Partido Liberal Colombiano con seis (6): Atlántico, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Putumayo y Santander.

El Partido Conservador obtuvo cinco (5) gobernaciones: Guaviare, Huila, Norte de Santander, Risaralda y Tolima. Cambio Radical obtuvo tres (3) gobernaciones: Arauca, Bolívar y Vaupés. El Partido Verde Opción Centro obtuvo dos (2) gobernaciones: Boyacá y César. Con una gobernación se quedó el Polo Democrático Alternativo, la gobernación del Departamento de Nariño, Alas Equipo Colombia obtuvo la gobernación de Antioquia, Convergencia Ciudadana obtuvo la gobernación del Amazonas, la Alianza Social Indígena obtuvo la gobernación de Caquetá y el movimiento Afro Colombiano obtuvo la gobernación del Cauca. El resto de gobernaciones fueron ganadas por coaliciones y movimientos significativos de ciudadanos.

Una mirada sobre el conjunto de los resultados a gobernaciones muestra que aunque en número el Partido de la U puede reclamar victoria sus gobernaciones corresponden a departamentos con poca población y escasos recursos si exceptuamos a los departamentos del Meta y Magdalena y con muchos recursos provenientes de las regalías petroleras el departamento del Casanare. El liberalismo conquistó en cambio cinco gobernaciones de primera línea que son las de Atlántico, Caldas, Córdoba, Cundinamarca y Santander. No obstante hay que señalar que en las elecciones de 2003 habían conquistado 12 gobernaciones a la postre es una reducción a la mitad, pero, también es cierto que ya en 2004 solo le quedaban tres, pues, las otras nueve se habían ido al bloque uribista. Cambio Radical obtiene una gobernación importante en cuanto a número de población y recursos, la de Bolívar. El Polo obtiene una gobernación importante en los dos sentidos que hemos



comentado que es la de Nariño y Alas Equipo Colombia se queda con una de las más importantes gobernaciones del país que es la de Antioquia.

Hablar de grandes ganadores o perdedores no es posible con los resultados del pasado 28 de octubre en cuanto se refiere a las gobernaciones departamentales de acuerdo con la distribución por partidos. A la coalición del Presidente Uribe no le fue mal puesto que sumados los partidos de la coalición obtuvieron 17 gobernaciones de las 32 solo que muchos de los departamentos desde el punto de vista del presupuesto y del total de la población de los mismos no son todos de la llamada primera categoría. El Partido Liberal tampoco puede reclamar victoria como lo hizo el ex presidente César Gaviria la noche y al día siguiente de las elecciones. El resultado de los demás partidos fue discreto.

Mapa político municipal.

El ganador desde el punto de vista numérico lo fue indiscutiblemente el Partido Conservador con 240 Alcaldías municipales seguido del Partido Liberal con 206 Alcaldías. Lejos estamos ya de los resultados de las primeras elecciones de Alcaldes en el año de 1988 cuando el Partido Liberal logró 446 Alcaldías y el Partido Conservador obtuvo en aquellas elecciones 413 Alcaldías. Entre tanto los grupos significativos de ciudadanos como ya señalamos se mantienen en la tendencia. En las elecciones de octubre pasado obtuvieron 117 alcaldías mientras que en las elecciones de 1988 obtuvieron 101 Alcaldías, un poco más del 10%. En aquellas elecciones se eligieron 1009 alcaldes mientras que en las pasadas se eligieron 1098.² Si se compara con los resultados electorales de 2003 el partido que gana indudablemente es el Partido Conservador que había elegido en 2003, 159 alcaldes y ahora elige 240 mientras el liberalismo pierde terreno pues había elegido en dicho año 233 contra los 206 que eligió en octubre pasado.³

Los siguientes partidos en número de Alcaldes son en su orden el Partido de la U. que obtuvo 123, el Partido Cambio Radical que obtuvo 112, Alas Equipo Colombia con 83, Convergencia Ciudadana con 72, Alianza Social Indígena con 41, Apertura Liberal con 37, Colombia Democrática con 34, Partido Verde Opción Centro con 23, Polo Democrático Alternativo con 20 y Colombia Viva con 13. Quizás valga la pena señalar que se observa

2 Santana Rodríguez, Pedro. Los Movimientos Cívicos el nuevo fenómeno electoral. Revista Foro N° 6, Bogotá, junio de 1998. pp. 47- 62.

3 Santana Rodríguez, Pedro. El nuevo mapa político: El Referendo y las elecciones regionales y municipales. Revista Foro N° 49, Bogotá, enero de 2004. pp. 3-15



un estancamiento del Polo Democrático Alternativo que en 2003 había obtenido 19 alcaldías (si se suman las 17 del Polo Democrático Independiente y las del Frente Social y Político) y ahora obtuvo 20, mientras que son ganadores netos el Partido de la U. que aún no existía y Cambio Radical que en aquella oportunidad eligió 25 y ahora pasa a 112. Alas Equipo Colombia fue fundado con posterioridad a aquellas elecciones en las cuales Equipo Colombia eligió 64 más dos que eligió Alas y ahora ganan al pasar a 83. Un crecimiento grande tuvo el Partido Convergencia Ciudadana fuertemente localizado en 2003 en el departamento de Santander y ahora extendido a nivel nacional, en el 2003 había elegido 21 Alcaldes y ahora elige 72. Mientras que los partidos más fuertemente implicados en la parapolítica como Apertura Liberal que tenía 27 ahora cuenta con 37, Colombia Democrática tenía 33 ahora cuenta con 34, Colombia Viva pierde de 28 que tenía baja a 13.

Precisamente si hacemos el ejercicio de sumar los partidos más fuertemente vinculados al fenómeno de la parapolítica, esto es, Alas Equipo Colombia, Convergencia Ciudadana, Apertura Liberal, Colombia Democrática, Colombia Viva tendríamos que sumados eligieron 239 Alcaldes una cifra un poco menor de los 251 Alcaldes reseñados en la investigación de Nuevo Arco Iris como aquellos relacionados con votaciones atípicas y en zonas de influencia del paramilitarismo. No obstante hay que señalar que al fenómeno de la parapolítica no escapan los otros tres socios mayoritarios de la coalición del Presidente Uribe cuales son el Partido Conservador, el Partido de las U. y Cambio Radical dado que todos ellos tienen parlamentarios vinculados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y ahora por la Fiscalía a las investigaciones penales por sus nexos con los grupos paramilitares. Tampoco escapa el Partido Liberal dado que además de que uno de sus mayores electores está involucrado, nos referimos al senador Juan Manuel López Cabrales, hay también otros tres ya formalmente vinculados en Antioquia y Caldas a dichas investigaciones.

Con todo, el partido que más ganancias tiene en las elecciones municipales es el Partido de la U. que como ya dijimos era inexistente en las pasadas elecciones regionales y ahora se constituye en la tercera fuerza en los municipios por debajo solo del Partido Conservador y del Partido Liberal, pero además se convirtió en el principal heredero de un conjunto de movimientos políticos que tuvieron un buen número de



Alcaldías y que desaparecieron en las pasadas elecciones. Movimientos como Moral, Convergencia Popular Cívica, Si Colombia, Mipol, Movimiento Popular Unido tuvieron en aquellas elecciones 102 alcaldías. En estas elecciones el principal heredero político de dichas alcaldías es el Partido de la U, seguido por el Partido Conservador, Cambio Radical, Partido Liberal y Alas Equipo Colombia.

Ahora bien, lo que hay que examinar de fondo es cómo quedó el mapa político sobre los terrenos estratégicos relacionados con los cultivos de uso ilícito, la ubicación de los laboratorios de procesamiento y las rutas del narcotráfico. Este es el verdadero telón de fondo de la disputa territorial en donde los partidos políticos se relacionan con el narcotráfico. Por ejemplo, parece evidente que los actores relacionados con el narcotráfico controlan hoy buena parte de todo el corredor de la costa pacífica colombiana. Un hecho significativo que el Polo Democrático debe tener en cuenta es que ganaron una buena parte de las Alcaldías en el corredor del pacífico nariñense y que ganaron además la gobernación del departamento. Esta zona es de alto riesgo pues allí se está librando una guerra entre guerrillas, paramilitares y narcotráfico.

Así pues los resultados electorales no nos permiten cantar victoria ni en los municipios ni en los departamentos con relación al retroceso definitivo de la parapolítica. Por el contrario la influencia de los partidos más fuertemente vinculados con los grupos paramilitares siguen manteniendo un poder extendido y amplio en Colombia.

Ahora bien, si examinamos la votación por los partidos tradicionales Liberal y Conservador y por los partidos uribistas, con la excepción de la coalición que llevó a Alex Char a la Alcaldía de Barranquilla no obtiene triunfos en las grandes ciudades en donde la nota predominante fue la elección de candidatos independientes como en Cartagena, Cali o Medellín o el resonante triunfo del Polo Democrático en Bogotá. Con la excepción de Bucaramanga, Ibagué, Tunja y Manizales tampoco hay un arrollador voto liberal en las grandes ciudades del país. El voto de opinión en las grandes ciudades del país está en los candidatos independientes, en ciudades intermedias siguen siendo importantes los votos liberales y conservadores. Éste último sigue teniendo gran importancia en municipios pequeños y medianos.



Para destacar los triunfos de Samuel Moreno Rojas en Bogotá en donde el Polo se alzó con la Alcaldía y obtuvo más de 915 mil votos aumentando su votación con respecto a la que obtuvo en 2003 con Luís Eduardo Garzón, pero además, logró obtener 61 ediles de los 184 que se eligen en Bogotá. Para el Polo los resultados en general no son buenos puesto que si bien aumenta el número de diputados y concejales así como ediles no logró canalizar el descontento en regiones en que por ejemplo el candidato Carlos Gaviria Díaz obtuvo votaciones muy significativas como, para poner solo dos ejemplos, ocurrió en las elecciones en los departamentos de la Guajira y Atlántico. El Polo debe reflexionar seriamente sobre un resultado agrí dulce: mantiene el segundo cargo político más importante en Colombia que es la Alcaldía de Bogotá, se consolida en el departamento de Nariño en donde elige gobernador a Antonio Navarro Wolf y logra en ese departamento 11 alcaldías de las 20 que obtiene en todo el país, pero, con estas dos excepciones sus votaciones son modestas. A ello contribuye por supuesto la propaganda adversa que se hace desde todos los partidos de la coalición uribista y la intervención abierta del Presidente tanto en Nariño como en Bogotá en contra de sus candidatos. Pero también corresponde a la estrategia electoral que se impuso en casi todo el país en donde prefirió la soledad y el purismo que en algunas regiones era apenas obvio por cuanto no contaba con candidatos visibles pero en otras regiones en que había que privilegiar la derrota de las maquinarias de la parapolítica se mantuvo inexplicablemente solitario o dio un espectáculo en el que el partido adhería a coaliciones amplias pero sus candidatos se mantuvieron hasta el final como ocurrió en Atlántico o al revés en que el candidato adhirió a las coaliciones y el partido se mantuvo al margen como en el caso de Cartagena para colocar dos casos relevantes. Allí el Polo tiene grandes problemas que debe encarar si de verdad quiere aproximarse a ser una alternativa de gobierno para el años 2010.

En los cuadros 2 y 3 se observa la votación por partidos para los concejos municipales y las Asambleas Departamentales. Quizás lo que habría que destacar aquí es el triunfo tampoco arrollador, pero, triunfo al fin y al cabo, del Partido Liberal que en votos obtuvo 2.146.407 y 2.265 concejales seguido por el Partido Conservador que obtuvo para concejos una votación de 1.762.623 y 2.156 concejales. El tercero fue el Partido de la U. con 1'618.028 votos que le permitieron elegir 1.359 concejales seguido de Cambio Radical con 1.599.056 votos y 1.303 concejales. En



votos le sigue el Polo Democrático Alternativo que sacó 962.043 votos y eligió 380 Concejales, pero, fue superado por Convergencia Ciudadana y por Alas Equipo Colombia que con un menor número de votos, obtuvieron 884 y 920 concejales respectivamente.

En las Asambleas Departamentales ganó el Partido Liberal que obtuvo 103 diputados, seguido por el Partido Conservador con 76, 59 del Partido de la U, Cambio Radical eligió 48, Convergencia Ciudadana 25, el Polo Democrático 22 y Alas Equipo Colombia 18. La proporción es más o menos la misma en cuanto al número de Alcaldías y Concejales. Las disparidades en cuanto al número de votos y curules corresponde a los lugares en los cuáles se elige, pues, es obvio que por ejemplo el Polo Democrático al tener concentrada su votación con un tercio en Bogotá solo elige en la ciudad 11 concejales.

Solo una nota final en cuanto a los resultados electorales para los cuerpos colegiados de departamentos y municipios y es que se nota evidentemente que los partidos de la coalición uribista mantienen mayoría en todos estos organismos. Hay que resaltar para los resultados del Partido Liberal y del Polo que ellos no tienen ni la maquinaria del gobierno central ni de la mayoría de las regiones y municipios ni cuentan con la burocracia y el gasto público que se ejecuta con prontitud por el gobierno nacional para aceitar la maquinaria y ganar en departamentos y municipios. Es notable que aún así hayan podido tener un importante resultado. Sus gobernantes en los niveles departamentales y municipales tendrán que sortear el hecho de ser oposición en un gobierno intolerante y que no actúa con políticas de Estado sino calculando los resultados electorales ligados a la campaña presidencial de 2006.

Precisamente si las elecciones fueran un test para la justa electoral presidencial de 2010 digamos brevemente que Uribe quisiera repetir, pero que sus apuestas están complicadas por el hecho que los Conservadores y los de Cambio Radical quisieran un escenario político sin Uribe aspirando al tercer mandato y esto es precisamente lo que Uribe advierte cuando amenaza con la hecatombe, es decir, que ve serios obstáculos para obtener el respaldo de parte fundamental de su propia coalición de derecha. En el lado liberal los resultados no son malos, pero el Partido Liberal se debate entre la línea de su Presidente



Cesar Gaviria Trujillo que prefiere y jugó a una coalición con sus antiguos caciques regionales que ahora están predominantemente en el Partido de la U. y en Cambio Radical y una coalición con la izquierda democrática representada en el Polo democrático a la cual son más afectos sectores como los que encabezan Horacio Serpa, Piedad Córdoba y Eduardo Verano y a la cual se suma ahora oportunistamente Ernesto Samper Pizano, después de apoyar a Uribe por cuatro años. Por su parte el Polo Democrático requerirá afinar sus estrategias para ser un partido más nacional si quiere asomarse con éxito a la disputa presidencial de 2010.

Cuadro N° 2	
Número de concejales por partido	
Partidos	Concejales
Partido Liberal	2.265
Partido Conservador	2.156
Partido de laU	1.369
Cambio Radical	1.303
Alas - Equipo Colombia	920
Convergencia Ciudadana	884
Colombia Democrática	574
Polo Democrático	360
Verde Opción Centro	316
Mira	33



Cuadro N° 3	
Resultados por partido para Asamblea	
Partidos	Número diputados
Partido Liberal	103
Partido Conservador	75
Partido de laU	59
Cambio Radical	48
Alas - Equipo Colombia	25
Convergencia Ciudadana	22
Colombia Democrática	18
Polo Democrático	14
Verde Opción Centro	10
Mira	3

Cuadro N° 4	
Número por partido para los Concejales	
Partidos	Total votos Concejales
Partido Liberal	2.146.407
Partido Conservador	1.762.623
Partido de laU	1.618.028
Cambio Radical	1.599.055
Polo Democrático	962.043
Convergencia Ciudadana	835.979
Alas - Equipo Colombia	784.854
Colombia Democrática	542.883
Verde Opción Centro	342.459
Mira	213.236



LOS COMPONENTES Y LOS ESCENARIOS DE LA CRISIS POLÍTICA.⁴

Con la apertura de investigación preliminar al senador del Partido de la U. Armando Benedetti, llega a 64 el número de parlamentarios investigados por sus nexos aparentes con los grupos paramilitares, de los cuales 54 pertenecen a todos los partidos de la coalición del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien por lo demás en encuesta reciente de Gallup que dirige Jorge Londoño mantiene un nivel de popularidad y aceptación entre los mil encuestados telefónicamente en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, del 79%, mientras que se desmorona la imagen del Congreso.

Precisamente en la actual crisis política uno de sus componentes principales es el que tiene que ver con el llamado escándalo de la parapolítica que ahora también invade al poder ejecutivo, quien hasta ahora hábilmente se había beneficiado del llamado teflón que protege al Presidente Uribe.

El Congreso de la República aumento su imagen negativa entre los encuestados por Gallup, ahora el 54% de los encuestados tiene una imagen negativa del Congreso de la República. Ello está asociado obviamente al llamado escándalo de la parapolítica que ya involucra a más del 20% de todos los parlamentarios y que sigue su curso pues la investigación sigue abierta. Un primer componente de la crisis reciente está relacionado con los nexos ya probados en múltiples casos entre los sanguinarios grupos paramilitares y los partidos mayoritariamente de la coalición uribista que se pusieron de presente en las elecciones de 2002 tanto en las parlamentarias como en las presidenciales. Precisamente uno de los elementos mejor guardados hasta ahora tiene que ver con el silencio que guardan los parlamentarios implicados en la investigación sobre los nexos entre las elecciones parlamentarias de marzo y las elecciones presidenciales de mayo de 2002. Hasta ahora los votos contaminados en las elecciones parlamentarias se aproximan a los 2.5 millones de votos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de dichos parlamentarios fueron el bastión del proyecto que llevó a Uribe a la Presidencia de la República.

En este primer componente de la crisis se destaca, como lo señaló la Corte Suprema en el fallo condenatorio proferido en diciembre pasado

4 Reflexiones de Mayo de 2008



contra el representante a la Cámara Eric Morris, una estrecha alianza de sectores políticos con los grupos paramilitares y en el cual se cometieron delitos como constreñimiento a los electores, fraude electoral y concierto para delinquir agravado. Los parlamentarios involucrados se habrían concertado con los grupos ilegales para lograr representación en el Congreso de la República y en los cuerpos colegiados tanto departamentales como municipales. Precisamente un segundo componente de la crisis tiene que ver con la infiltración de los gobiernos departamentales y municipales que para el caso del departamento de Sucre tiene tras las rejas a cuatro diputados y a un ex gobernador del departamento prófugo de la justicia, el señor Salvador Arana. Este componente de la crisis está aún poco investigado puesto que hasta ahora hay tres gobernadores implicados, dos de ellos condenados, el gobernador del departamento del Magdalena, Trino Luna y el gobernador del Casanare. Entre tanto, Hernando Molina, gobernador del Cesar detenido bajo órdenes de la Fiscalía General de la Nación sigue en investigación. Hay también una docena de Alcaldes investigados y algunos de ellos detenidos como es el caso de seis alcaldes del Departamento de Casanare, el alcalde de Cúcuta y la alcaldesa de Soledad en el departamento del Atlántico. Pero la infiltración paramilitar es mucho más amplia en los niveles territoriales como se desprende de las propias versiones libres de los jefes paramilitares en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Meta, etc. Las investigaciones académicas de la Corporación Nuevo Arco Iris y de Claudia López señalan que la infiltración cubrió a 12 departamentos y a más de 250 municipios. La Fiscalía General de la Nación a quien corresponde esta investigación marcha a paso de tortuga. Falta mucho por investigar y por destapar en el componente territorial del escándalo de la parapolítica toda vez que la alianza entre parapolíticos y grupos paramilitares era aún más fuerte en los niveles territoriales que en el propio Congreso de la República.

Un tercer componente de la crisis, muy bien guardado hasta el momento, tiene que ver con la infiltración paramilitar en el ejecutivo nacional. Gustavo Salazar abogado de los "Mellizos"⁷⁵ ha señalado que Sabas Pretelt entonces ministro del Interior del Presidente Uribe habría prometido a cambio del apoyo a la reelección del Presidente Uribe la no extradición de sus clientes. Salazar señaló que dicho apoyo fue económico y electoral. Se refiere a las elecciones del año 2006.

5 aSe trata de los narcotraficantes Víctor Manuel Mejía Múnera abtido en operación adelantada por la Policía Nacional en el departamento de Antioquia el 30 de abril de 2008 y la captura de Miguel Ángel Mejía Múnera el día 2 de mayo en el departamento del Tolima. Se sabe que e s t o s d o s narcotraficantes compraron por siete millones de dólares su ingreso a los grupos paramilitares para de e s t a m a n e r a beneficiarse de la negociación con el gobierno de Uribe. Después que el gobierno o r d e n a r a e l confinamiento de los jefes paramilitares en el municipio de la Ceja, los dos narcotraficantes huyeron de la justicia. El sobreviviente Miguel Ángel Mejía deberá negar o ratificar la denuncia de su abogado Gustavo Salazar sobre compromisos con el ex ministro Sabas Pretel de la Vega



Pero este tercer campo de la crisis también está relacionado con la forma como se tramitó la reelección del presidente Uribe en el Congreso de la República. Todo indica que para lograr el voto favorable de la ex parlamentaria en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, funcionarios del gobierno al más alto nivel ofrecieron puestos a la parlamentaria y entregaron 200 millones de pesos al representante del Partido Conservador por el departamento del Valle del Cauca, Teodolindo Avendaño, para que se abstuviera de concurrir a la sesión y de esta manera obtener el porcentaje mínimo de votos requerido para aprobar la reelección presidencial de Uribe en el año 2006. Como se sabe Yidis Medina se declaró culpable y se acogió a la figura de sentencia anticipada. Falta aún la decisión de la Corte Suprema de Justicia que si la encuentra culpable es porque confiere plena validez a las pruebas y a la versión de Yidis Medina con lo cual son inevitables dos decisiones judiciales subsiguientes: el llamado a Teodolindo Avendaño a que responda en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la apertura de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación contra el ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, el Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Mejía y el ex secretario General de la Presidencia de la República Alberto Velásquez.

Hay múltiples elementos que contaminan la campaña presidencial de 2002 y la más reciente de mayo de 2006. Ingresos a la campaña de donantes como Enilce López, alias la Gata por más de 200 millones de pesos y los apoyos de la mayoría de los parlamentarios detenidos así como el comprobado fraude electoral en departamentos como Sucre y Magdalena al tiempo que Rafael García ex director de Informática del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, uno de los testigos estrella del escándalo ha señalado que el fraude se repitió para las elecciones presidenciales.

La contaminación del ejecutivo nacional apenas comienza a aparecer en las investigaciones judiciales. Hasta ahora comprometen a Jorge Noguera Cotes detenido a órdenes de la Fiscalía General de la Nación y con resolución de acusación por poner al DAS al servicio de los paramilitares. Ahora las investigaciones se dirigen a comprobar si se cometió el delito de cohecho en la aprobación del Acto Legislativo que posibilitó la reelección del Presidente Uribe en el año 2006 y los señalamientos de financiamiento de la campaña e intimidación a los



electores en la campaña electoral de 2006, como lo señala Gustavo Salazar.

Un cuarto campo involucra el tema de la negociación con los grupos paramilitares y la marcha de la ley de Justicia y Paz. Aquí, como lo señala Antanas Mockus, el gobierno gana indulgencias con padrenuestros ajenos. Para enderezar el contenido de impunidad que aprobó el Congreso y que sancionó Uribe el 25 de julio de 2005 hay que contar con el fallo del 18 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional que declaró inexecutable apartes claves de la ley que conducían a la impunidad y luego tanto fallos como actuaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno se ha opuesto a estas decisiones de la Justicia como se opone ahora a la suspensión de las órdenes de extradición mientras los jefes paramilitares no confiesen sus crímenes y no reparen a sus víctimas.

Las propuestas para enfrentar la crisis.

En la coyuntura actual se abren tres escenarios para afrontar la crisis política. El primer escenario es el normal e institucional que significa que el Congreso de la República decida autodepurarse aprobando una reforma política de fondo y enfrentando también a fondo el tema del narcotráfico que es el combustible tanto de la guerra como de la corrupción que condujo al fenómeno de la parapolítica. Un segundo escenario es el de un referendo constitucional que busque el adelanto de las elecciones y que al mismo tiempo sometan a aprobación los temas de la reforma política que sean de vigencia inmediata y la propuesta de una Asamblea Constitucional con temario limitado.

Sobre el primer escenario hay que señalar que es el que ha contado hasta ahora con el respaldo del Presidente de la República quien además busca por todos los medios minimizar la profundidad de la crisis. La reforma política del gobierno buscaba pagar con el mínimo su propia responsabilidad política. El contenido era ridículo y minimalista todo se limitaba a la pérdida de la curul para el partido respectivo una vez ejecutoriada la sentencia contra el parlamentario respectivo. Nuestro cálculo es que la coalición uribista perdería unas diez curules al ritmo en que marchan las investigaciones tanto en la Corte como en la Fiscalía.



Durante la semana que concluye⁶ el uribismo tuvo que moverse, pues, no tenía los votos suficientes para aprobar su formula en la Cámara de Representantes y tuvo que ceder a la exigencia del liberalismo y de la mayoría de los representantes a la Cámara del Polo (siete de los ocho parlamentarios) que exigieron en el debate que se congelara la curul desde el llamado a indagatoria y/o ratificación de la orden de captura. Actualmente 33 sillas de aprobarse la reforma tendrían que ser congeladas. Además se descontarán los votos obtenidos por el parlamentario una vez condenado y si el partido no obtiene el número de votos del umbral pierde toda su representación parlamentaria. También deberá reintegrar los fondos correspondientes a los recursos recibidos por la reposición de votos. Si pierde el 50% de su representación parlamentaria pierde también su personería jurídica.

Hay que decir que el congelamiento de la silla y la pérdida de la misma una vez el parlamentario sea condenado así como la devolución de recursos, el descuento de los votos para el umbral y la eventual pérdida de toda la representación parlamentaria son medidas que marchan en la dirección correcta. No hay que cometer el error de sectores del Polo Democrático que establecen una contradicción entre un mecanismo como la Constituyente y la aprobación de estas medidas. Nosotros no vemos ninguna contradicción en aprobar estos aspectos y al mismo tiempo señalar que la reforma es ampliamente insuficiente por no atacar problemas de fondo como el ejemplar castigo que merecen todos los delitos electorales y no solamente la infiltración de los grupos armados ilegales en la política también merecen castigo ejemplar la compra y venta de votos, el fraude electoral y el constreñimiento a los electores. Pero hay que decir que un tema fundamental tiene que ver con el financiamiento de las campañas. Nosotros hemos defendido el financiamiento público de todas las campañas con drásticos castigos para quienes violen esta normatividad.

Pero también hay que incluir en la reforma política el tema del voto preferente y la lista cerrada y el uso de los medios masivos de comunicación. Si se quiere un control férreo sobre las listas hay que replantear el sistema del voto preferente y si se quieren campañas austeras y de bajo costo hay que recuperar espacios para que el Estado los pueda adjudicar gratuitamente en la radio y la televisión. El modelo de entregar todos los espacios en las concesiones a las empresas de

6. Se trata de la última semana de mayo de 2008. (N de E)



comunicación encarece las campañas y termina convirtiéndose en una puerta giratoria en que por una puerta se licita y por la otra se devuelve de nuestros impuestos grandes cantidades de dinero por el uso de los espacios electromagnéticos que son propiedad pública.

La pérdida de la personería jurídica debería tener mecanismos menos exigentes. Por ejemplo la pérdida de un 30% de la bancada de un partido llevaría a la pérdida de su personería jurídica y todo ello debería producir como efecto la redistribución de las curules entre aquellos partidos que no tengan investigaciones por los mismos hechos. Ahí sí habría un verdadero castigo político.

Para hacer una reforma de esta naturaleza tendría que haber un amplio consenso político que no parece posible con el gobierno actual dueño de las mayorías en el Congreso de la República.

Por ello se discuten las otras dos propuestas. La primera el adelanto de las elecciones mediante la figura del referendo constitucional. Este instrumento es constitucional e idóneo solo que si no se incluyen propuestas de reforma política como las que hemos mencionado no tiene ningún sentido pues las elecciones se realizarían con las mismas reglas del juego que son precisamente las causas de la situación que se trata de combatir. Un Referendo debería incluir las preguntas claves sobre sanciones, financiamiento y medios de comunicación y un umbral más exigente.

Finalmente la propuesta de una Asamblea Constituyente tiene ventajas en cuanto a la deliberación social y pública de las propuestas y a que el temario podría ser ampliado a temas fundamentales, como por ejemplo, sobre la implantación en Colombia de un régimen parlamentario, el bicameralismo, la reforma política y el tema de fondo del narcotráfico y la problemática agraria en Colombia. Aquí hay que enfrentar el tema del narcotráfico y la reforma agraria. El modelo de la gran propiedad y la pobreza del campesinado influyen determinadamente en el fenómeno de los cultivos de uso ilícito, etc. Ahora bien el problema es que en la actual correlación de fuerzas políticas nos parece que una constituyente en manos de la coalición uribista sin terminar las investigaciones judiciales es tremendamente peligrosa para la constitución de 1991.



Para debatir sobre estos temas partidos políticos, autoridades locales y regionales y organizaciones sociales nos hemos propuesto la realización de una Cumbre Social y Política que vaya construyendo una propuesta con una amplia deliberación ciudadana.

